

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, seis (6) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por CESAR AUGUSTO MUÑOZ SANCHEZ en contra de BRILLADORA ESMERALDA LTDA (en liquidación judicial) y el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Radicado 05360-31-05-002-2016-00446-01).

ANTECEDENTES

Pretende el demandante se declare la existencia de un contrato de trabajo en la modalidad a término indefinido, en el que Brilladora Esmeralda LTDA (en liquidación judicial) fungió como empleadora; ejecutado entre el 3 de julio de 2012 y el 11 de mayo de 2013; y que al cumplir funciones de aseo y vigilancia, como auxiliar servicios generales, en una institución educativa del orden departamental, el Departamento de Antioquia es deudor solidario. En consecuencia, se condene a las demandadas a pagarle: salarios insolutos, auxilio de cesantía, intereses a las cesantías, prima de servicios, compensación de vacaciones, el *pago en pesos de las dotaciones regulares dejadas de pagar a razón de cien mil pesos (sic)*, la indemnización por despido sin justa causa, subsidio de transporte, las sanciones moratorias de que tratan los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST, la indexación y las costas (fls 2-5).

Sustentó tales pedimentos relatando que celebró un contrato de obra o labor, con Brilladora Esmeralda LTDA (en liquidación judicial), como auxiliar de servicios generales, en el que desempeñaba funciones de aseo y vigilancia, por lo que la naturaleza permanente de esa labor, hacía que la vinculación fuera a término indefinido. La relación laboral fue desarrollada, en los extremos temporales resaltados. El 11 de mayo de 2013 le fue terminado el contrato sin justificación legal. La labor la desempeñó en la Institución Educativa Rural Héctor Higinio Bedoya (Ant), centro que depende del Departamento de Antioquia, a cuyo cargo y responsabilidad compete el normal funcionamiento de la labor educativa, lo que incluye los servicios de mantenimiento de la planta física de los planteles escolares, como el aseo o la vigilancia. Su salario fue equivalente al SMLMV. Su empleadora no le pagó las obligaciones sociales reclamadas, y le quedó adeudando los salarios de la última quincena de enero de 2013, 11 días de febrero de 2013 y 11 días de mayo de ese año (fls 5 vto. a 8).

El Departamento de Antioquia, comentó que no fungió como empleador de la activa y por ello no le constan las circunstancias de tiempo, modo y lugar mencionadas en el escrito inicial. Aclaró que el servicio de aseo en las instituciones educativas, lo prestó un tercero a través de los *contratos de servicios de aseo y servicios generales* suscritos con su Secretaría de Educación (contratos 2012-SS-15-0047 y 2013-SS-15-0025). Dijo en cuanto a la responsabilidad que desea endilgársele, que el ente territorial funge como un mero administrador de los recursos que gira el Ministerio de Educación, según lo prevé el artículo 17 de la Ley 715 de 2001. De esa manera se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones las que denominó: falta de legitimación en la causa por pasiva, ineptitud sustancial de la demanda, inexistencia de la obligación, terminación de los contratos debidamente justificados, prescripción de las acreencias laborales, no aplicación de la indemnización moratoria y de la buena fe asumida por el Departamento de Antioquia, y no concurrencia de la sanción por no consignar cesantías y por no pagar la liquidación a la terminación del contrato (fls 56-63)

El curador *ad-litem* de BRILLADORA ESMERALDA LTDA (en liquidación judicial), en términos generales comentó que no le constan los hechos. Propuso las excepciones de mérito que denominó: falta de jurisdicción y competencia, imposibilidad de proferir fallo respecto de una empresa en liquidación judicial, y coadyuvancia de las otras excepciones propuestas por la codemandada (fls 215-218).

En sentencia del 18 de noviembre de 2019, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí (Antioquia), con base en la documental, declaró que entre el demandante y Brilladora Esmeralda LTDA (en liquidación), existió un contrato de trabajo a término indefinido, ejecutado entre el 3 de junio de 2012 y el 11 de mayo de 2013. Y como la reclamación se presentó dentro de los tres años siguientes a la data del finiquito, declaró no probada la excepción de prescripción. Así, condenó a la pasiva a pagar al actor: \$727.050 por salarios insolutos, \$540.364 por auxilio de cesantía; \$31.707 por intereses a las cesantías; \$540.364 por prima de servicios; \$270.182 por compensación de las vacaciones; y \$775.670 por auxilio de transporte, conceptos de cuyo pago no se allegó prueba alguna. En cuanto a la indemnización por despido sin justa causa, señaló que era procedente, dado que la empleadora no acreditó la causal legal de dicha determinación, por lo que dispuso el pago de \$589.500 por este concepto. Igualmente condenó a las sanciones moratorias previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST, porque la sociedad en liquidación no honró sus obligaciones a tiempo y no acreditó elementos que justificaran ese actuar; sobre la primera, señaló que se causó entre el 15 de febrero y el 11 de mayo, ambas fechas de 2013, tasándola en \$1.670.250; y sobre la segunda, anunció que se generó a partir del día siguiente a la finalización del contrato, esto es, desde el 12 de mayo de 2013, y siguiendo el precedente del órgano de cierre, hasta la data en que inició el proceso de liquidación de la subordinante, el 24 de febrero de 2014, lo que arrojó \$5.541.300. A partir del 25 de febrero de 2014, dispuso la indexación. Analizó el artículo 34 del CST, y halló que el Departamento de Antioquia, es responsable solidariamente por estas condenas, por ser el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, y de esa forma lo declaró. Absolvió de los demás

pedimentos, y condenó en costas a las convocadas, fijando como agencias en derecho \$801.479 (fl 240 archivo juzgamiento Minuto 00:53 en adelante).

Esa determinación fue cuestionada a través del recurso vertical, así:

La demandante manifestó su inconformidad respecto de la limitación sobre la sanción del artículo 65 del CST. En su sentir, ello no se ajusta a derecho dado que la mala fe, no solo del empleador sino del solidario se encuentran más que acreditadas en el plenario, y la liquidación de la sociedad no puede utilizarse como justificación de la ausencia de pago de las prestaciones sociales. En todo caso, planteó que la indexación debe otorgarse desde la fecha de terminación del contrato laboral, porque allí debía cancelarse la totalidad del crédito.

El Departamento de Antioquia, exteriorizó su disenso en cuatro aspectos: i) en cuanto se declaró la existencia del contrato de trabajo, en su sentir, la documental no demuestra el elemento de la subordinación; ii) en lo que toca con la imposición de las sanciones por no pago, dado que frente al solidario, también debe analizarse si existió mala fe, y su actuar siempre se enmarcó en el ámbito de la buena fe, para el efecto citó como parámetro jurisprudencial la sentencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral del 22 de abril de 2004, Radicado 21.074; iii) en lo relativo a la imposición de las sanciones por no pago de cesantías, y por no pago de prestaciones, aduce que no es plausible conceder ambas, por la prohibición de su concurrencia; de no acogerse este criterio, predicó que debe mantenerse la manera en que se ordenaron por la primera instancia; y iv) respecto de la condena en costas, propone su exoneración, porque el polo activo no hizo un esfuerzo *desmesurado* a nivel probatorio.

Por su parte, **el curador *ad litem* de Brilladora Esmeralda LTDA** (en Liquidación), primero propuso que la jurisdicción ordinaria laboral no tiene competencia para conocer de este asunto, porque en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1116 de 2006, los procesos deben remitirse al liquidador quien es el juez natural en cuanto a la graduación de créditos. Y luego, planteó la revocatoria del fallo gravado en dos tópicos: 1) auxilio de

transporte: desde su perspectiva, debió absolverse de este pedimento, ante de la ausencia de acreditación sobre su otorgamiento necesario; 2) Sanciones por falta de consignación de la cesantías y falta de cancelación de la liquidación de prestaciones sociales: aseveró que estas no proceden en el caso, por falta de prueba sobre su mala fe.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

Conforme a lo que es materia de apelación y las decisiones de la *a quo* que deben ser revisadas en el grado jurisdiccional de consulta a surtir en favor del ente territorial (acatando el mandato del artículo 69 de la Legislación Adjetiva Laboral), corresponde a la Sala determinar cómo problemas jurídicos: si entre el demandante y Brilladora Esmeralda LTDA (en liquidación), existió un contrato de trabajo a término indefinido, sus extremos temporales, si ocurrió un despido unilateral y es viable la indemnización por despido sin justa causa, si proceden o no las obligaciones sociales reclamadas -lo que dependerá del acaecimiento o no de la prescripción. En ese sentido, se aclarará, cómo opera este fenómeno, en tratándose de las prestaciones causadas en el marco de un vínculo laboral-; y si son viables las sanciones previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990, y 65 del CST. Igualmente es parte de los asuntos a resolver, si el proceso podía adelantarse ante esta jurisdicción en atención a la Ley 1116 de 2006 por la apertura del proceso liquidatorio de Brilladora Esmeralda LTDA; y si el Departamento de Antioquia es responsable solidario de las obligaciones en atención a lo previsto en el artículo 34 del CST, verificándose si la liquidación que hizo la primera juez, se encuentra o no ajustada a derecho.

Pues bien, para abordar la primera de las cuestiones, se recuerda que según los artículos 22, 23 y 24 del CST, un contrato laboral existe entre una persona natural denominada trabajador, y otra natural o jurídica denominada

empleador, con el fin de que el primero preste sus servicios a cambio de una remuneración, en favor, y bajo la continuada subordinación del segundo, es decir, que el empleador es quien dispone las condiciones de tiempo, modo, calidad y cantidad del servicio prestado, pues si esa posibilidad la tiene quien realiza la labor, se estaría en presencia de un trabajador independiente y de otro tipo de convenio. Siendo claro, que procesalmente, según las disposiciones en comento, una vez acreditada la prestación personal del servicio, se presume que esta fue regida por el contrato explicado, correspondiendo a quien se reputa empleador desvirtuar ese hecho que la ley da por sentado, demostrando por ejemplo la independencia en la ejecución de la actividad. Activada la presunción, en todo caso, en el proceso también debe obrar prueba de los extremos temporales y de la remuneración, como parámetros para liquidar las obligaciones que se aleguen debidas.

En el caso, desde el escrito inicial, el actor afirmó haber prestado sus servicios personales como auxiliar de servicios generales, en favor de Brilladora Esmeralda LTDA (en liquidación), a quien señaló como empleadora. Lo que se encuentra probado sin dubitación alguna, sobre todo a partir de la documental del folio 161 vto., en la que la sociedad aludida, señaló:

“La dirección de gestión humana de BRILLADORA ESMERALDA LTDA. Certifica que el señor CESAR AUGUSTO MUÑOZ SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1037750868, laboró para nuestra empresa desde el 3 de julio de 2012, hasta el 11 de mayo de 2013 en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales con un contrato por obra o labor devengando un SMLV...”

Documento que a voces del inciso segundo del artículo 244 del CGP, aplicable a estos ritos por lo previsto en el 145 del CPTSS, se presume autentico, por no haber sido tachado de falso o desconocido por la pasiva, y que demuestra sin temor a equívocos, no solo la existencia del contrato de trabajo, sino sus extremos temporales y la remuneración percibida, tal y como lo declaró la *a quo*. Contrario a lo sostenido en la apelación por el Departamento de Antioquia, no se requieren medios de convicción adicionales para que la Sala aprecie los elementos de la esencia del convenio laboral, pues aparte de que en esta especialidad prima la libre formación del convencimiento y no existe

tarifa legal de prueba (artículo 61 del CPTSS), la jurisprudencia ha reconocido que, ante la existencia de documentos como el puesto de relieve, se deben dar por ciertos los hechos certificados, trasladándose la carga de la prueba a quien lo expidió, debiendo llevar al juez a una convicción diferente -lo que en el *sub lite*, ni siquiera se intentó-; pues no es usual que una persona falte a la verdad y dé razón documental de la existencia de aspectos tan importantes que comprometen su responsabilidad patrimonial o que el juez cohoneste este tipo de conductas eventualmente fraudulentas (Sentencias CSJ SL14426-2014, SL6621-2017, SL 2600-2018 y SL4214-2019).

Ahora bien, el certificado alude a que entre las partes se desarrolló un contrato de obra o labor determinada, no obstante, recuérdese que para que haya lugar a esta modalidad, debe acreditarse el pacto de duración del contrato, atada a una condición futura e incierta pero si determinable¹ (sin exigencias de solemnidad, puede ser verbal o escrito), pues de ello depende lo finito de su existencia, y la posibilidad de su terminación legal por el acaecimiento de la condición, lo que también puede inferirse de la naturaleza de la actividad que ejecute el trabajador (numeral 1º del artículo 47 del CST, y Sentencia CSJ SL2600-2018)², pero cuando la duración no es determinable, lógicamente el convenio entre las partes se entenderá comprendido en la modalidad residual a término indefinido.

Por ello, estuvo bien que la juez de conocimiento declarara el contrato en la modalidad indefinida, dado que no se observan medios persuasivos para determinar la duración definida del contrato; y de la labor desempeñada por el ex trabajador, esto es, como auxiliar de servicios generales de la Institución Educativa Rural Héctor Higinio Bedoya Vargas (como lo certificó esta institución a folio 16, y según las funciones visibles en los folios 40 y 41), al contrario, se pone al descubierto la naturaleza permanente de la actividad, pues se prestaba el servicio de aseo y vigilancia de las instalaciones de una institución educativa, cuyo suministro es una obligación constante del

¹ Comentarios al Régimen Laboral Colombiano, Ediciones Rosaristas 1984. German G. Valdés Sánchez, página 95.

² Derecho del Trabajo. Principios y Relaciones Individuales, Editorial Temis 1981. Álvaro García Solano, página 206.

Departamento de Antioquia, por tratarse de un plantel no certificado, luego, en atención a lo previsto en los artículos 298 de la Constitución Política, y 6º de la Ley 715 de 2001, según los cuales compete y es responsabilidad de las entidades territoriales, como la pasiva, la promoción del desarrollo social y educativo en su jurisdicción, y organizar la prestación y administración del servicio educativo, debe entenderse como parte de su responsabilidad, la provisión del aseo, mantenimiento y vigilancia, en las instalaciones donde dicho servicio sea prestado, pues de su inclusión deriva la eficacia del primero, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional (Sentencias T-516 de 1996 y T-273 de 2014).

Ese motivo, justifica que fuera la Secretaría de Educación del ente convocado, la que celebró los acuerdos 2012SS150047 y 2013-SS-150025 (fls 68-82), en los que se contrató con Brilladora Esmeralda LTDA *“la prestación del servicio de aseo, mantenimiento y servicios generales para todos los tipos de Instituciones y Ciudadelas Educativas Oficiales de los municipios no certificados del departamento de Antioquia, con sus respectivas secciones”*. En estos convenios, se especificó una duración en la cláusula segunda y tercera de cada uno, señalándose que su vigencia desaparecería, el primero, el 31 de diciembre de 2012 o cuando se agotare el presupuesto; y el segundo, al finalizar el tercer mes desde la *autorización del inicio de labores*. Estipulaciones de las cuales no puede desglosarse la temporalidad del contrato suscrito entre Brilladora y el demandante, porque no obra prueba de que su vigencia se hubiere atado a los convenios interinstitucionales, y en todo caso, se itera, la naturaleza de la labor no permitía la coexistencia de esa modalidad contractual.

Por lo visto, la conclusión de la juez de la modalidad contractual, se subsume a los postulados legales y jurisprudenciales reseñados y a las pruebas aportadas, por lo que, se confirmará. No obstante, los extremos temporales se modificarán (en cuanto al inicial), en el grado de consulta que se surte en favor del ente territorial, pues si bien la juez señaló que tendría como tales los arriba certificados, erró al determinar el inicial, el 3 de junio de 2012, toda vez que la documental alude al 3 de julio de 2012, como fecha de inicio del contrato, lo que tendrá implicaciones favorables para la codemandada. En ese sentido, se

declarará que el contrato de trabajo plurimentado, tuvo lugar entre el 3 de julio de 2012 y el 11 de mayo de 2013, por así constar en los documentos de los folios 16, 161 vto. y 162 vto.

Previo a determinar el valor de las obligaciones sociales que se predicaron insolutas por el actor, y cuyo pago no fue demostrado por la empleadora, es necesario resolver sobre la excepción de prescripción, habiendo sido propuesta por el Departamento de Antioquia (fl 60 vto.), la que, dicho sea de paso, beneficiará a Brilladora Esmeralda LTDA, por tratarse de litisconsortes necesarios (artículo 61 del CGP y sentencias de la CSJ SL 29.522 del 28 de abril de 2009, reiterada en la SL12234 del 10 de septiembre de 2014).

Son los artículos 151 del Estatuto Adjetivo Laboral y 488 del CST, los que consagran el fenómeno extintivo como una forma de hacer desaparecer las acciones derivadas de las obligaciones generadas en el contrato de trabajo, que no han sido reclamadas en tiempo. Estas disposiciones, enseñan que desde que un emolumento se hace exigible (momento en que se puede reclamar su pago, por haber surgido el deber de cubrirlo por el empleador), el trabajador cuenta con tres años para reclamarlo, a través de una simple petición escrita, la que interrumpe ese término trienal solo por un lapso igual.

Bajo esa definición, lógicamente, a modo ilustrativo: sobre los salarios, los intereses a las cesantías, las primas de servicios (no se reclaman en este proceso), y las sanciones de que tratan los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST, que se van haciendo exigibles, mes a mes, o año a año, de esa misma forma, debe contabilizarse el término prescriptivo de los tres años, es decir, mes a mes o año a año. En otras palabras, y para mayor claridad, el salario de junio de 2009 que es exigible en ese mes, puede reclamarse hasta en junio de 2012, de lo contrario prescribiría; los intereses a las cesantías que se pueden reclamar por el año 2009, se hacen exigibles a partir del 31 de enero de 2010 (numeral 2 del artículo 1º de la Ley 52 de 1975), por lo tanto pueden reclamarse hasta el 31 de enero de 2013; y la prima de junio de 2009, que se hace exigible en ese mes, podría reclamarse hasta en junio de 2012. Ese razonamiento es diferente cuando se analiza la posibilidad de prescripción de las vacaciones y las cesantías; las primeras, porque la

prescripción opera a los cuatro años, debido a que el empleador cuenta con un año a partir de su exigibilidad para concederlas, y las segundas, porque todas se hacen exigibles a la finalización del contrato de trabajo, según el artículo 249 del CST.

Aplicadas esas reflexiones a las diligencias en estudio, se tiene que, la reclamación al empleador se presentó el 20 de abril de 2016 (fl 19) y la demanda se radicó el 12 de agosto de ese año (fl 12 vto.), por ello, los derechos que a continuación se enuncian, se extinguieron por efectos de la prescripción: la prima de servicios exigible a diciembre de 2012, dado que su reclamación debía hacerse antes de diciembre de 2015; los auxilios de transporte generados antes del 20 de abril de 2013, puesto que estos se iban causando mes a mes, y así mismo debieron reclamarse para interrumpir la prescripción; los intereses a las cesantías proporcionales de 2012, pues se hicieron exigibles en enero de 2013, lo que implica que su reclamo debía ocurrir antes de enero de 2016 (art 1º Ley 52 de 1975); los salarios debidos de enero y febrero de 2013, cuya solicitud al empleador debía ocurrir antes de esos meses de 2016; y la sanción por no consignación a las cesantías, la generada antes del 20 de abril de 2013, por lo que, esta principiará desde esa fecha, como se verá. En esa línea, se revocará la sentencia consultada en cuanto declaró no probado este medio exceptivo, y en su lugar, se declarará probado parcialmente.

De ahí que las condenas impuestas en primer grado, deban ser modificadas de acuerdo a la siguiente tabla:

| OBLIGACIÓN | PRESCRIBIÓ? | VALOR |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Salarios enero y febrero de 2013 | Sí | 0 |
| Intereses a las cesantías 2012 | Sí | 0 |
| Prima de servicios 2012 | Sí | 0 |

| | | |
|--|-------|-------------|
| Auxilios de transporte hasta el 19 de abril de 2013 | Sí | 0 |
| 11 días de salario de mayo de 2013 | No | \$216.150 |
| Intereses a las cesantías de 2013 | No | \$10.487 |
| Cesantías de 2012 y 2013 | No | \$553.892 |
| Vacaciones compensadas proporción 2012 y 2013 | No | \$247.357 |
| Prima de servicios 2013 | No | \$240.167 |
| Auxilios de transporte del 20 de abril de 2013 al 11 de mayo de 2013 | No | \$49.350 |
| | TOTAL | \$1.317.403 |

Es de aclarar, que el auxilio de transporte institucionalizado a través de la Ley 15 de 1959, contrario a lo manifestado por el curador ad litem de la pasiva, sí es procedente en las condiciones ya detalladas, porque la remuneración percibida equivale al SMLMV, y no se probaron las circunstancias en las que ha reparado la doctrina de esta especialidad para su improcedencia, tales como: el trabajador reside en su lugar de trabajo, o el empresario suministra el transporte.

En cuanto a la indemnización tarifada de que trata el artículo 64 del CST, se tiene que la juez declaró que el contrato finalizó el 11 de mayo de 2013, y como la pasiva no demostró una causal legal de su extinción, habiéndose acreditado el despido con el documento del folio 162, es plausible el reconocimiento de la indemnización por despido sin justa causa, la que fue calculada con 30 días de

salario, lo que para la Sala es razonable, por la presencia de la modalidad contractual indefinida, este ítem entonces, se confirmará.

En lo que respecta a la imposición de las sanciones previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990, y 65 del CST, basta decir que de ningún medio se desprenden actuaciones de la empleadora Brilladora Esmeralda LTDA (en liquidación), que justifiquen la ausencia de: i) consignación de las cesantías en un fondo y ii) pago de la liquidación final de las prestaciones sociales, por lo tanto, es jurídicamente correcto su imposición, sin que se esté en presencia de la prohibición de que estas puedan concurrir en el tiempo, en tanto **la primera**, se causó desde el 20 de abril de 2013 (por efectos de la prescripción) y hasta el 11 de mayo de ese mismo año, como bien lo ordenó la *a quo*, cuyo monto sí se modificará para ordenar el pago por este guarismo en la cuantía de \$412.650; mientras que la **segunda**, se causó a partir del 12 de mayo de 2013 y hasta el 24 de febrero de 2014, cuyo monto fue correctamente liquidado en primera instancia, última fecha en que se dio apertura al proceso de liquidación de la sociedad empleadora (fl 12 vto.), esto último, porque durante el proceso de liquidación del empresario, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha adoctrinado que no es viable imponer esta sanción, pues *“de imponerle la indemnización moratoria a un empleador que se encuentra en esas condiciones, es decir en liquidación obligatoria, no tendría razón de ser la expedición de las leyes especiales que permiten la intervención Estatal en las empresas, las cuales están destinadas a proteger no solo el capital y la inversión económica, sino también los intereses de los asalariados y por ende el derecho Constitucional al empleo consagrado en el artículo 25 del Ordenamiento Superior, que se orienta a que un agente estatal dirija los destinos de la unidad de explotación económica y pretenda ya la recuperación económica, ora la liquidación de la sociedad”* (ver sentencias SL2833 de 2017 y 20.764 del 10 de octubre de 2013); precedente que no puede desconocerse, dado que los casos resueltos presentan semejanza fáctica.

Sobre estas sanciones, por un lado para que se absuelva, y de otro lado para que se extienda la condenación de la del artículo 65 ibídem, hasta la fecha de satisfacción total de la obligación; tanto la demandante, como el departamento,

sugieren como necesario un análisis de las conductas de la entidad territorial, para hallar la buena o mala fe, pero esto no es viable, ya que el actuar que permite la imposición o no de este concepto, es el que haya dispuesto el empleador, esto es, Brilladora Esmeralda, al momento del finiquito contractual, y no el del posible deudor solidario, cuya responsabilidad no pende de elementos subjetivos. Es cierto que la Sala de Casación Laboral, de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 22 de abril de 2004, Radicado 21.074, permitía la exoneración de las moratorias al deudor solidario como lo argumentó la apoderada judicial del Departamento en el recurso de apelación, empero, ese criterio fue recogido en la providencia del mismo colegiado de Radicado 22.905 del 6 de mayo de 2005, explicándose la hermenéutica según la cual la condena de estas sanciones proceden para el solidario por la responsabilidad del artículo 34 del CST, cuya adecuación típica no prevé que su reconocimiento se genere a causa de valoraciones subjetivas, como si lo hace el artículo 65 para imponérsele al empleador. En tal sentencia, se dijo:

“...Si bien es cierto que en fallo del 22 de abril de 2004 (Rad. 21074), ratificado posteriormente en la decisión del 24 de febrero de 2005 (Rad. 23233), sostuvo esta corporación que el deudor solidario del contratista (artículo 34 del C.S.T.), o sea, el dueño de la obra o beneficiario del trabajo, termina equiparándose al empleador para efectos de la sanción del artículo 65 del C.S.T., por lo que era atendible su buena fe para verse exonerado de la obligación de indemnizar, reexaminando el tema por la mayoría de la Sala, es del caso ahora recoger la anterior jurisprudencia, por las razones que seguidamente se exponen.

El artículo 34 del C. S. del T. no hace otra cosa que hacer extensivas las obligaciones prestacionales o indemnizatorias del contratista, al dueño de la obra conexas con su actividad principal, sin que pueda confundirse tal figura jurídica con la vinculación laboral, como lo ha sostenido esta Sala en otras ocasiones. La relación laboral es única y exclusivamente con el contratista independiente, mientras que la relación con el obligado solidario, apenas lo convierte en garante de las deudas de aquél. Así lo ha sostenido la Corte, entre otras, en las sentencias del 26 de septiembre de 2000 (Rad. 14038) y del 19 de junio de 2002 (Rad. 17432).

Es claro, entonces, que la culpa que genera la obligación de indemnizar es exclusiva del empleador, lo que ocurre es que, por virtud de la ley, el dueño de la obra se convierte en garante del pago de la indemnización correspondiente, no porque se le haga extensiva la culpa, sino por el fenómeno de la solidaridad, que, a su vez, le permite a éste una vez cancele la obligación, subrogarse en la acreencia contra el contratista,

en los términos del artículo 1579 del Código Civil, lo que, se ha dicho, reafirma aún más su simple condición de garante.

En estas condiciones, es la buena o mala fe del empleador, o sea del contratista, la que debe analizarse para efectos de imponer la sanción moratoria y no la de su obligado solidario.

[...]

Es, en consecuencia, irrelevante para la decisión, que la conducta asumida por la obligada solidaria hubiere estado o no revestida de buena fe, por lo que la acusación se torna infundada...” [subrayas fuera del texto]

Este es el criterio actual y dominante de la doctrina legal probable especializada que puede verse entre otras en las sentencias SL175 de 2021, SL17473 de 2017, y la de Radicado 37.936 del 3 de noviembre de 2010. De modo que, en este aspecto, no son prósperos los argumentos de las censuras.

Todos los emolumentos que constituyen la condena, deberán ser indexados como bien se dispuso en la primera sentencia, dado que se trata de capitales que han perdido su poder adquisitivo, siendo adecuado que la corrección monetaria opere a partir del 25 de febrero de 2014, ya que, la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del CST, cubrió los capitales hasta el día anterior a esa fecha.

De todas las condenas, debe responder solidariamente el Departamento de Antioquia, ante el razonamiento de su responsabilidad en el suministro del servicio de aseo, mantenimiento y vigilancia en las instituciones educativas, que fue desarrollado en párrafos precedentes, pues en ese escenario y para el caso, ocupó el lugar de beneficiario del servicio en los términos del artículo 34 del CST.

En síntesis, se revocará y modificará la decisión de primera instancia, en los términos ya expuestos, ultimando que no tiene razón el curador ad litem, cuando afirma que esta jurisdicción no tiene competencia para definir el asunto, pues revisadas las normas del proceso liquidatorio, estas prevén únicamente, el envío de los trámites de ejecución al liquidador (artículo 20 de la Ley 1116 de 2006), y no el de los declarativos u ordinarios, como el presente,

así, procesos como este, deben mantenerse ante los jueces de esta especialidad, porque los derechos a reconocer se encuentran en discusión, hasta tanto se defina su procedencia, como aquí ocurrió, en la sentencia.

Finalmente, al no salir adelante las posibilidades planteadas en los recursos de apelación de las partes, siguiendo los lineamientos del artículo 365 del CGP, no se impondrán costas en esta instancia. Y en cuanto a las que se impusieron en el primer nivel a cargo del Departamento de Antioquia, no es estimable su exoneración, ya que, la norma en comento prevé el criterio objetivo que estas son asumidas por la parte vencida en juicio, y si ello es así, el ente territorial debe cubrirlas, sin miramientos a que su contraparte haya ejercido una actividad probatoria “*desmesurada*” o no, pues fue vencida en el litigio, al haber sido vinculada con el objetivo de que se declarara solidariamente responsable, lo que se logró con éxito.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA** la sentencia objeto de apelación y consulta de fecha y procedencia conocidas, en cuanto declaró no probada la excepción de prescripción. En su lugar, **DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN**, en los términos y condiciones, explicados en la parte motiva. La **MODIFICA** en cuanto a su ordinal primero, el cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR que entre el señor CESAR AUGUSTO MUÑOZ SÁNCHEZ, y la sociedad BRILLADORA ESMERALDA LTDA EN LIQUIDACIÓN existió contrato de trabajo que se desarrolló entre el 3 de julio de 2012 y el 11 de mayo de 2013, en el que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA es solidariamente responsable con el empleador por el valor de las prestaciones e indemnizaciones. En consecuencia, SE CONDENA a BRILLADORA ESMERALDA LTDA EN LIQUIDACIÓN y al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, solidariamente, a pagar al demandante las siguientes sumas:



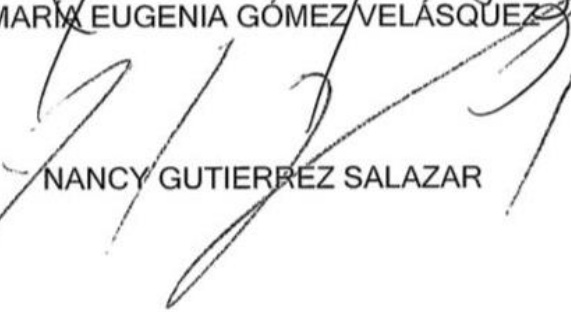
| OBLIGACIÓN | VALOR |
|--|-----------|
| 11 días de salario de mayo de 2013 | \$216.150 |
| Intereses a las cesantías de 2013 | \$10.487 |
| Cesantías de 2012 y 2013 | \$553.892 |
| Vacaciones compensadas proporción 2012 y 2013 | \$247.357 |
| Prima de servicios 2013 | \$240.167 |
| Auxilios de transporte del 20 de abril de 2013 al 11 de mayo de 2013 | \$49.350 |
| Sanción artículo 99 de la Ley 50 de 1990 | \$412.650 |

Y la **CONFIRMA** en lo demás.

Sin costas en esta instancia.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 117 fijados el 7 de julio de 2021
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario.